TEMA 1. EL CONCEPTO DE DERECHO. LAS FUENTES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL: ENUMERACIÓN Y JERARQUÍA NORMATIVA. LA LEY. LA COSTUMBRE. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. OTRAS FUENTES DEL DERECHO.

Apuntes del primer ejercicio del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad

1. EL CONCEPTO DE DERECHO **1**
- 1.1. LOS APOYOS CONSTITUCIONALES 1
- 1.2. ACEPCIONES DEL TÉRMINO 1
- 1.3. LOS CARACTERES DE LA NORMA JURÍDICA 1

2. LAS FUENTES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL: ENUMERACIÓN Y JERARQUÍA NORMATIVA **2**
- 2.1. EL DOBLE SENTIDO DE LA EXPRESIÓN 2
- 2.2. LA ENUMERACIÓN DEL ARTÍCULO 1.1 DEL CÓDIGO CIVIL 2
- 2.3. EL ORDEN DE APLICACIÓN: LA PRELACIÓN DE FUENTES 2
- 2.4. EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA 3
- 2.5. JERARQUÍA Y COMPETENCIA 4
- 2.6. LA PLENITUD DEL ORDENAMIENTO Y EL DEBER DE RESOLVER 5

3. LA LEY **5**
- 3.1. CONCEPTO 5
- 3.2. LA CONSTITUCIÓN 5
- 3.3. LEYES ORGÁNICAS Y LEYES ORDINARIAS 6
- 3.4. EL DECRETO LEGISLATIVO 7
- 3.5. EL DECRETO-LEY 7
- 3.6. EL REGLAMENTO 8
- 3.7. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 10
- 3.8. LEYES MARCO, LEYES DE TRANSFERENCIA O DELEGACIÓN Y LEYES DE ARMONIZACIÓN 10
- 3.9. VIGENCIA DE LAS LEYES: ENTRADA EN VIGOR, DEROGACIÓN E IRRETROACTIVIDAD 11

4. LA COSTUMBRE **11**
- 4.1. TEXTO LEGAL Y CONCEPTO 11
- 4.2. LOS CUATRO REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1.3 12
- 4.3. LOS USOS JURÍDICOS 12
- 4.4. CLASES DE COSTUMBRE 12
- 4.5. COSTUMBRE Y DERECHOS CIVILES FORALES O ESPECIALES 13

5. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO **13**
- 5.1. TEXTO LEGAL Y DOBLE FUNCIÓN 13
- 5.2. CONTENIDO 13
- 5.3. LA PRUEBA DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 14

6. OTRAS FUENTES DEL DERECHO **14**
- 6.1. LA JURISPRUDENCIA 14
- 6.2. LOS TRATADOS INTERNACIONALES 15
- 6.3. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 16
- 6.4. LO QUE NO SON FUENTES: ANALOGÍA, EQUIDAD Y DOCTRINA CIENTÍFICA 17
- 6.5. LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS 17

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

1. EL CONCEPTO DE DERECHO

1.1. LOS APOYOS CONSTITUCIONALES

El art. 1.1 de la Constitución Española (CE) proclama los valores superiores del ordenamiento jurídico:

> ***«España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.»***

El art. 9.1 CE establece la vinculación general a la norma: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.»

El art. 9.3 CE enuncia las garantías estructurales del ordenamiento:

> ***«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.»***

1.2. ACEPCIONES DEL TÉRMINO

Es tradicional distinguir dos acepciones, ambas presentes en el Código Civil (CC):

- **Derecho objetivo**: el conjunto de normas que regulan la convivencia y cuyo cumplimiento puede imponerse coactivamente. Es el sentido del art. 1.1 CC cuando habla de «las fuentes del ordenamiento jurídico español».

- **Derecho subjetivo**: el poder o facultad que el ordenamiento reconoce a una persona. Es el sentido del art. 7.1 CC cuando dispone que «los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe».

Junto a esta distinción se manejan los pares Derecho natural y Derecho positivo, según se atienda a principios anteriores y superiores a la norma escrita o al Derecho efectivamente puesto en vigor, y Derecho público y Derecho privado, según la posición de imperio o de igualdad en que se sitúen los sujetos de la relación.

1.3. LOS CARACTERES DE LA NORMA JURÍDICA

Se atribuyen a la norma jurídica los caracteres de generalidad (se dirige a una pluralidad indeterminada de destinatarios), abstracción (contempla supuestos tipo y no casos concretos), imperatividad (impone una conducta) y coercibilidad (su cumplimiento puede imponerse por la fuerza organizada del Estado).

La **imperatividad** tiene reflejo normativo expreso en el art. 6.1 CC, que impone la obligatoriedad de la norma al margen de su conocimiento efectivo: «La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.»

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

Se distingue asimismo entre normas imperativas o de *ius cogens* y normas dispositivas, distinción que el Código Civil presupone en dos preceptos:

- Art. 6.3 CC: «Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.»

- Art. 6.2 CC: «La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.»

2. LAS FUENTES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL: ENUMERACIÓN Y JERARQUÍA NORMATIVA

2.1. EL DOBLE SENTIDO DE LA EXPRESIÓN

Se distingue entre fuentes en sentido material, esto es, los poderes u órganos con capacidad para crear normas —las Cortes Generales, el Gobierno, las Asambleas autonómicas, la comunidad social en el caso de la costumbre—, y fuentes en sentido formal, los modos o formas en que la norma se manifiesta: la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. El art. 1 CC se ocupa de las fuentes en sentido formal.

2.2. LA ENUMERACIÓN DEL ARTÍCULO 1.1 DEL CÓDIGO CIVIL

El art. 1.1 CC enumera las fuentes:

> ***«Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.»***

Son tres, y en ese orden. La enumeración es cerrada en cuanto a las fuentes en sentido propio: la jurisprudencia no figura en ella.

La competencia para determinar cuáles son las fuentes del Derecho corresponde en exclusiva al Estado. El art. 149.1.8.ª CE le reserva la legislación civil, «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan». Le atribuye «en todo caso» las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros e instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los conflictos de leyes y la «determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial».

2.3. EL ORDEN DE APLICACIÓN: LA PRELACIÓN DE FUENTES

El art. 1 CC no se limita a enumerar: establece un orden de aplicación excluyente.

- La ley se aplica en primer lugar. No hay precepto que lo diga expresamente: se deduce del carácter subsidiario que los apartados siguientes atribuyen a las demás fuentes.

- La costumbre «sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada» (art. 1.3 CC).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

- Los principios generales del Derecho «se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico» (art. 1.4 CC).

La costumbre es, por tanto, fuente subsidiaria de primer grado, y los principios generales, fuente subsidiaria de segundo grado, además de fuente informadora.

2.4. EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA

Tiene un doble fundamento normativo. En el plano constitucional, el art. 9.3 CE garantiza la jerarquía normativa. En el plano civil, el art. 1.2 CC dispone:

> ***«Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.»***

La sanción que impone el precepto es la de carecer de validez. No se trata de una regla de preferencia aplicativa, sino de invalidez de la norma inferior contraria a la superior.

La escala de rangos, de mayor a menor, es la siguiente:

- La Constitución, a la que están sujetos ciudadanos y poderes públicos (art. 9.1 CE): «norma suprema del ordenamiento jurídico» según el art. 5.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).

- Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en España, que forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE) y prevalecen, en caso de conflicto, sobre cualquier otra norma interna, salvo las de rango constitucional (art. 31 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales).

- Las normas con rango de ley: leyes orgánicas y ordinarias aprobadas por las Cortes Generales (art. 66.2 CE) y normas del Gobierno con rango de ley, decretos legislativos y decretos-leyes (arts. 82 a 86 CE y art. 24.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).

- Los reglamentos, dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria (la del Gobierno, art. 97 CE).

Dentro de los reglamentos estatales, el art. 24.2 de la Ley 50/1997 fija la jerarquía interna: «Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.»

El control de la sujeción del reglamento a la ley corresponde a los tribunales, que «controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican» (art. 106.1 CE); y la Administración actúa «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho» (art. 103.1 CE).

Frente al reglamento contrario a norma superior, el órgano judicial lo inaplica por sí mismo. Es la regla del art. 6 LOPJ:

> ***«Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.»***

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

A esa inaplicación en el caso concreto se añade el control contencioso-administrativo del art. 106.1 CE, que permite la anulación del reglamento ilegal con efectos generales.

Frente a la ley contraria a la Constitución, en cambio, el juez ordinario no puede inaplicarla: ha de plantear la **cuestión de inconstitucionalidad**. Dispone el art. 163 CE:

> ***«Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.»***

El art. 5.2 LOPJ reproduce el precepto, aunque sustituye su inciso final por una remisión a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC). El art. 5.3 LOPJ añade un requisito: «Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional.» Son cuatro los presupuestos: norma con rango de ley aplicable al caso; que de su validez dependa el fallo; que el órgano judicial considere que pueda ser contraria a la Constitución; e imposibilidad de acomodarla al texto constitucional por vía interpretativa.

De ahí resulta el monopolio de rechazo del Tribunal Constitucional: solo él puede expulsar del ordenamiento la ley inconstitucional, declarando la nulidad de los preceptos impugnados y, en su caso, la de aquellos otros de la misma ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia (art. 39.Uno LOTC), con efectos generales desde la publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 38.Uno LOTC). El juez ordinario conserva el enjuiciamiento de los reglamentos y el de las leyes anteriores a la Constitución, que puede entender derogadas por su disposición derogatoria.

2.5. JERARQUÍA Y COMPETENCIA

Entre las normas del Estado y las de las Comunidades Autónomas no rige, con carácter general, el principio de jerarquía, sino el de **competencia**: cada una opera en su ámbito material propio, y una ley autonómica no es inferior a una ley estatal, sino distinta por razón de la materia.

El art. 149.3 CE cierra el sistema en tres frases: la primera abre a los Estatutos las materias no atribuidas expresamente al Estado; la segunda reúne la cláusula residual a favor del Estado y la prevalencia del Derecho estatal; la tercera establece la supletoriedad:

> ***«Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.»***

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

2.6. LA PLENITUD DEL ORDENAMIENTO Y EL DEBER DE RESOLVER

El sistema de fuentes se cierra con una regla de plenitud dirigida a jueces y tribunales (art. 1.7 CC):

> ***«Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.»***

El precepto proscribe el *non liquet*: el juez no puede abstenerse de fallar alegando oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Los instrumentos que el propio Código le facilita para colmar las lagunas son la analogía (art. 4.1 CC), la costumbre, que rige en defecto de ley aplicable (art. 1.3 CC), y los principios generales del Derecho (art. 1.4 CC).

3. LA LEY

3.1. CONCEPTO

En el art. 1.1 CC el término «ley» no se emplea en sentido estricto —norma aprobada por las Cortes Generales con ese nombre— sino en sentido amplio, comprensivo de toda norma jurídica escrita emanada de los poderes públicos con potestad normativa: Constitución, tratados, leyes en sentido propio, normas del Gobierno con rango de ley y reglamentos.

Se atribuyen a la ley los caracteres de norma escrita, emanada de poder con potestad normativa, general y publicada oficialmente. Esta última exigencia es garantía constitucional expresa: el art. 9.3 CE garantiza la publicidad de las normas.

3.2. LA CONSTITUCIÓN

Es la norma de rango superior del ordenamiento. Su supremacía se manifiesta en tres planos. En el de la vinculación general, el art. 9.1 CE sujeta a ella a los ciudadanos y a los poderes públicos. En el de la supremacía formal, el art. 5.1 LOPJ dispone:

> ***«La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.»***

Y en el de la garantía jurisdiccional, el art. 27.Uno LOTC establece que, mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados.

Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad, según el art. 27.Dos LOTC:

a) Los Estatutos de Autonomía y las demás leyes orgánicas.

b) Las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley, sin perjuicio, en el caso de los decretos legislativos, de lo previsto en el art. 82.6 CE.

c) Los tratados internacionales.

d) Los reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

e) Las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad en los casos de delegación legislativa.

f) Los reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

La Constitución es además una norma rígida: su reforma exige los procedimientos agravados de los arts. 167 y 168 CE. Desde 1978 ha sido reformada cuatro veces: la Reforma de 27 de agosto de 1992 (art. 13.2 CE), la de 27 de septiembre de 2011 (art. 135 CE), la de 15 de febrero de 2024 (art. 49 CE) y la de 19 de mayo de 2026. Esta última dio nueva redacción al art. 69.3 CE para suprimir las agrupaciones de islas como circunscripción: la antigua agrupación Ibiza-Formentera se divide, y tanto Ibiza como Formentera pasan a ser circunscripción propia y eligen un senador cada una. Su **disposición transitoria única** pospone la eficacia de la creación de las dos circunscripciones hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren tras la entrada en vigor de la reforma. Todas ellas se tramitaron por el procedimiento ordinario del art. 167 CE, único aplicable a los preceptos afectados.

3.3. LEYES ORGÁNICAS Y LEYES ORDINARIAS

La potestad legislativa corresponde a las Cortes Generales, que «ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución» (art. 66.2 CE).

El art. 81 CE define la ley orgánica:

> ***«1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.***
> ***2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.»***

La aprobación de las leyes orgánicas no puede delegarse en las Comisiones Legislativas Permanentes, exclusión que alcanza también a la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes de bases y los Presupuestos Generales del Estado (art. 75.3 CE); y la iniciativa popular no procede «en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia» (art. 87.3 CE).

La relación entre ley orgánica y ley ordinaria no es de jerarquía sino de competencia material: la ley ordinaria no puede invadir la reserva de ley orgánica, y la ley orgánica no puede extenderse más allá de las materias reservadas.

La ley ordinaria es la aprobada por las Cortes Generales por mayoría simple, sin reserva material específica. Un supuesto singular de reserva de ley lo establece el art. 53.1 CE respecto de los derechos del Capítulo segundo del Título I: «Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).»

En cuanto a la sanción, promulgación y publicación, «el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación» (art. 91 CE).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

3.4. EL DECRETO LEGISLATIVO

Se produce por delegación de las Cortes Generales. El art. 82.1 CE permite delegar en el Gobierno «la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior», es decir, no reservadas a ley orgánica.

El apartado 2 prevé dos modalidades: el texto articulado, cuando el objeto de la delegación es su formación, en cuyo caso el instrumento de delegación es una ley de bases; y el texto refundido, cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo, en cuyo caso el instrumento es una ley ordinaria.

El apartado 3 fija los requisitos de la delegación:

> ***«La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.»***

En cuanto al contenido, las leyes de bases «delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio» (art. 82.4 CE), y la autorización para refundir «determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos» (art. 82.5 CE).

El art. 83 CE fija los límites de las leyes de bases: no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

«Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control» (art. 82.6 CE). Y el Gobierno está facultado para oponerse a la tramitación de proposiciones de ley o enmiendas contrarias a una delegación legislativa en vigor, pudiendo presentarse entonces una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación (art. 84 CE).

Conforme al art. 85 CE, «las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos».

3.5. EL DECRETO-LEY

El art. 86.1 CE dispone:

> ***«En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.»***

El presupuesto habilitante es el caso de extraordinaria y urgente necesidad, y su naturaleza la de disposiciones legislativas provisionales. Las materias excluidas son cuatro: el ordenamiento de las

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

instituciones básicas del Estado; los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I; el régimen de las Comunidades Autónomas; y el Derecho electoral general.

En cuanto a la convalidación o derogación, el art. 86.2 CE exige que los decretos-leyes sean inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante ese mismo plazo, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3 CE).

El procedimiento de convalidación o derogación lo regula el art. 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados. El debate y la votación se realizan en el Pleno de la Cámara o de la Diputación Permanente antes de transcurrir los treinta días siguientes a la promulgación; un miembro del Gobierno expone las razones que han obligado a ella, y el debate sigue lo establecido para los de totalidad. Los votos afirmativos se entienden favorables a la convalidación y los negativos, a la derogación. Convalidado el decreto-ley, si algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley y la Cámara se pronuncia a favor, se tramita por el procedimiento de urgencia, sin que sean admisibles las enmiendas de totalidad de devolución. El acuerdo de convalidación o derogación se publica en el «Boletín Oficial del Estado».

3.6. EL REGLAMENTO

La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno, que «dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado» y «ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes» (art. 97 CE).

El reglamento es la disposición de carácter general dictada por la Administración con rango inferior a la ley. Su titularidad no es exclusiva del Gobierno de la Nación. Conforme al art. 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Los reglamentos se clasifican por su relación con la ley y por su origen:

- Por su relación con la ley: **ejecutivos** o de desarrollo, los que desarrollan una ley previa; **independientes**, los dictados en materias no reguladas por ley ni reservadas a ella, ámbito propio de la organización administrativa; y **de necesidad**, los dictados ante una situación extraordinaria, que pueden desplazar temporalmente la aplicación de la ley al amparo de una habilitación legal expresa.

- Por su origen: **estatales**, **autonómicos** y **locales**, correspondientes a los tres titulares de la potestad que enumera el art. 128.1 de la Ley 39/2015.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

El art. 24.1 de la Ley 50/1997 enumera las formas que revisten las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, que aprueban las normas de los arts. 82 y 86 CE.

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, para las disposiciones y actos cuya adopción le esté atribuida.

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, para las normas reglamentarias de su competencia y las resoluciones que deban adoptar esa forma.

d) Acuerdos del Consejo de Ministros, para sus decisiones que no deban adoptar la forma de Real Decreto.

e) Acuerdos de las Comisiones Delegadas del Gobierno, que revisten la forma de Orden del Ministro competente o, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros, del Ministro de la Presidencia.

f) Órdenes Ministeriales, para las disposiciones y resoluciones de los Ministros, que, cuando afecten a varios Departamentos, revisten la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

Los límites materiales del reglamento los fija el art. 128.2 de la Ley 39/2015:

> ***«Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.»***

El apartado 3 fija la regla de jerarquía interna: «Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.»

La infracción de esos límites se sanciona con **nulidad de pleno derecho**. Conforme al art. 47.2 de la Ley 39/2015, «también serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales».

Rige además el principio de **inderogabilidad singular** (art. 37.1 de la Ley 39/2015): «Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.» Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria (art. 37.2 de la Ley 39/2015).

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

El art. 23 de la Ley 50/1997 establece una regla especial de entrada en vigor: sin perjuicio del art. 2.1 CC, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de esta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. No se aplica a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, lo que ha de quedar debidamente acreditado en la respectiva Memoria.

3.7. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Conforme al art. 147.1 CE, «dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico».

Su contenido mínimo, según el apartado 2, comprende la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; la delimitación de su territorio; la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en ellos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3 CE), en concordancia con el art. 81.1 CE.

3.8. LEYES MARCO, LEYES DE TRANSFERENCIA O DELEGACIÓN Y LEYES DE ARMONIZACIÓN

El art. 150 CE prevé tres tipos de leyes estatales destinados a modular el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

- **Leyes marco** (apartado 1): las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre esas normas legislativas autonómicas.

- **Leyes orgánicas de transferencia o delegación** (apartado 2): el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

- **Leyes de armonización** (apartado 3): el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Solo la segunda exige ley orgánica. Las leyes marco y las de armonización son leyes ordinarias, si bien estas últimas requieren la previa apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara.

3.9. VIGENCIA DE LAS LEYES: ENTRADA EN VIGOR, DEROGACIÓN E IRRETROACTIVIDAD

Es el contenido de los tres apartados del art. 2 CC:

> ***«1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el "Boletín Oficial del Estado", si en ellas no se dispone otra cosa.***
> ***2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.***
> ***3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.»***

La *vacatio legis* de veinte días es supletoria: cede ante disposición expresa en contrario de la propia ley.

De la regla de derogación se extraen tres consecuencias: la derogación solo procede por ley posterior; tiene el alcance que expresamente se disponga y se extiende siempre, de forma tácita, a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior; y no hay reviviscencia automática de la ley derogada.

La irretroactividad es igualmente supletoria en el plano civil. En el plano constitucional es garantía, pero acotada: el art. 9.3 CE garantiza únicamente la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, no la de toda norma.

4. LA COSTUMBRE

4.1. TEXTO LEGAL Y CONCEPTO

El art. 1.3 CC dispone:

> ***«La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre.»***

La costumbre es la norma creada e impuesta por el uso social, sin intervención de un órgano con potestad normativa. Se le atribuyen dos elementos: uno material o externo, el *usus*, esto es, la repetición constante y uniforme de una conducta; y otro espiritual o interno, la *opinio iuris seu necessitatis*, la convicción de que esa conducta es jurídicamente obligatoria.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

4.2. LOS CUATRO REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1.3

De la lectura del precepto se extraen cuatro requisitos acumulativos:

- Subsidiariedad: «sólo regirá en defecto de ley aplicable». Es fuente subsidiaria de primer grado, lo que excluye la costumbre *contra legem*.
- No ser contraria a la moral.
- No ser contraria al orden público.
- Resultar probada: ha de acreditarla quien la invoca.

A diferencia de la ley, que no necesita prueba —*iura novit curia*— y cuya ignorancia no excusa de su cumplimiento (art. 6.1 CC), la costumbre no se presume conocida por el juez.

El régimen procesal de esa prueba está en el art. 281.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que sitúa a la costumbre junto al Derecho extranjero como objeto de prueba:

> ***«También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.»***

Hay una sola excepción al requisito de la prueba, y exige dos condiciones acumulativas: conformidad de las partes sobre la existencia y el contenido de la costumbre, y que sus normas no afecten al orden público, límite que el propio art. 1.3 CC impone.

4.3. LOS USOS JURÍDICOS

El último inciso del art. 1.3 CC equipara a la costumbre los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad. Se distinguen así los usos normativos, que crean regla de conducta y se equiparan a la costumbre a efectos de fuente, y los usos interpretativos, que solo sirven para aclarar el sentido de una declaración de voluntad y que, por expresa exclusión del precepto, no tienen la consideración de costumbre.

En el ámbito mercantil los usos tienen una posición propia: conforme al art. 2 del Código de Comercio, los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en el Código, «se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y, a falta de ambas reglas, por las del Derecho común».

4.4. CLASES DE COSTUMBRE

Por su relación con la ley se distingue entre costumbre *secundum legem*, según la ley; *praeter legem*, al margen de la ley, para suplirla; y *contra legem*, contraria a la ley. Solo la *praeter legem* tiene cabida en el art. 1.3 CC, porque la costumbre únicamente rige en defecto de ley aplicable; la *contra legem* está excluida.

Por su ámbito territorial se distingue entre costumbre general, comarcal y local.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

4.5. COSTUMBRE Y DERECHOS CIVILES FORALES O ESPECIALES

El art. 149.1.8.ª CE, transcrito en el epígrafe 2.2, reserva al Estado «en todo caso» la determinación de las fuentes del Derecho «con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial».

De ahí que en los territorios con Derecho civil propio la costumbre pueda ocupar una posición distinta, en algunos preferente sobre el Derecho supletorio, conforme a lo que dispongan sus propias normas. Frente a esos derechos, el Código Civil rige «como derecho supletorio, en defecto del que lo sea» en cada territorio «según sus normas especiales» (art. 13.2 CC); y, con carácter general, «las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes» (art. 4.3 CC).

5. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

5.1. TEXTO LEGAL Y DOBLE FUNCIÓN

El art. 1.4 CC dispone:

> ***«Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.»***

El precepto atribuye a los principios generales dos funciones. Como fuente subsidiaria de segundo grado, se aplican como norma para resolver el caso, pero solo en defecto de ley o costumbre. Como principios informadores del ordenamiento, orientan la creación, la interpretación y la aplicación de todo el Derecho, y esta función opera siempre, con independencia de que exista ley o costumbre aplicable.

5.2. CONTENIDO

Se trata de las ideas fundamentales que inspiran el ordenamiento, deducidas bien del propio Derecho positivo por inducción, bien del Derecho natural. La Constitución positiviza buena parte de ellas: los valores superiores del art. 1.1 CE —libertad, justicia, igualdad y pluralismo político— y las garantías del art. 9.3 CE.

El propio Código Civil recoge además, en su Título Preliminar, principios de alcance general:

- Buena fe (art. 7.1 CC): «Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.»

- Prohibición del abuso del derecho (art. 7.2 CC): «La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.»

- Prohibición del fraude de ley (art. 6.4 CC): «Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.»

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

5.3. LA PRUEBA DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

A diferencia de lo que ocurre con la costumbre, el art. 1.4 CC no exige que los principios generales del Derecho resulten probados.

6. OTRAS FUENTES DEL DERECHO

6.1. LA JURISPRUDENCIA

El art. 1.6 CC dispone:

> ***«La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.»***

La jurisprudencia no es fuente del Derecho: no figura en la enumeración del art. 1.1 CC, y el art. 1.6 CC le atribuye una función distinta, la de complementar el ordenamiento jurídico.

Del precepto se extraen los requisitos para que exista jurisprudencia en sentido técnico: doctrina establecida por el Tribunal Supremo, y no por otros órganos judiciales; establecida de modo reiterado; y producida al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, es decir, al aplicar las tres fuentes del art. 1.1 CC.

Ello se conecta con la posición constitucional del juez: los jueces y magistrados son «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley» (art. 117.1 CE).

La doctrina del Tribunal Constitucional tiene un régimen propio y más intenso. El art. 5.1 LOPJ impone a todos los jueces y tribunales interpretar y aplicar las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Y en cuanto a sus sentencias:

- Art. 38.Uno LOTC: las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad «tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”».
- Art. 39.Uno LOTC: cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, «declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados», así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia.
- Art. 40.Dos LOTC: «en todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales».

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

6.2. LOS TRATADOS INTERNACIONALES

El art. 1.5 CC establece la regla civil: «Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el "Boletín Oficial del Estado".»

En el plano constitucional, el art. 96.1 CE dispone:

> ***«Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.»***

Para la denuncia se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el art. 94 CE (art. 96.2 CE).

El art. 94.1 CE exige la previa autorización de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado en cinco casos: tratados de carácter político; tratados o convenios de carácter militar; los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. En los demás casos, «el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios» (art. 94.2 CE).

El art. 93 CE regula los tratados de atribución de competencias: «Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.» Es la vía por la que España se integró en las Comunidades Europeas.

En cuanto al control previo de constitucionalidad, «la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional» (art. 95.1 CE); el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción (art. 95.2 CE).

El desarrollo legal es la Ley 25/2014, de la que interesan cinco reglas:

- Publicación (art. 23 de la Ley 25/2014): los tratados válidamente celebrados se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial del Estado» y formarán parte del ordenamiento jurídico interno una vez publicados en él.

- Eficacia (art. 28 de la Ley 25/2014): sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de Derecho internacional, y producirán efectos en España desde la fecha que el tratado determine o, en su defecto, a partir de la fecha de su entrada en vigor.

- Observancia (art. 29 de la Ley 25/2014): todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados en vigor en los que España sea parte y velar por su adecuado cumplimiento.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

- Ejecución (art. 30.1 de la Ley 25/2014): «Los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.»

- Prevalencia (art. 31 de la Ley 25/2014): las normas contenidas en los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional.

6.3. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Se distingue en él el **Derecho originario** del **Derecho derivado**. El originario lo forman los Tratados constitutivos y sus sucesivas modificaciones —hoy el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que «tienen el mismo valor jurídico» (art. 1 TUE)—, a los que se suma la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que conforme al art. 6.1 TUE «tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados». El derivado lo integran los actos que las instituciones adoptan para ejercer las competencias de la Unión.

Los actos típicos de producción normativa de la Unión se regulan en el art. 288 TFUE:

> ***«Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.»***

El precepto dice que el reglamento es directamente aplicable, y no que tenga «efecto directo», que es una construcción jurisprudencial distinta.

Los actos jurídicos «deberán estar motivados y se referirán a las propuestas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los Tratados» (art. 296 TFUE). Conforme al art. 297 TFUE, se publican en el *Diario Oficial de la Unión Europea* los actos legislativos y, entre los no legislativos, los reglamentos, las directivas que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros y las decisiones que no indiquen destinatario, y entran en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación. Las demás directivas y las decisiones que indiquen un destinatario se notifican a sus destinatarios y surten efecto en virtud de dicha notificación.

Junto a los actos del art. 288 TFUE, los arts. 290 y 291 TFUE regulan dos categorías de actos no legislativos. Los **actos delegados** son actos no legislativos de alcance general que un acto legislativo delega en la Comisión para completar o modificar determinados elementos no esenciales de aquel; el acto legislativo delimita de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación, y la regulación de los elementos esenciales de un ámbito queda reservada al acto legislativo, sin poder ser objeto de delegación; en su título figura el adjetivo «delegado» o «delegada». Los **actos de ejecución** proceden cuando se requieren condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, que confieren entonces

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).

competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los arts. 24 y 26 TUE, al Consejo; en su título figura la expresión «de ejecución».

La relación con el ordenamiento interno se rige por dos principios de construcción jurisprudencial. La **primacía** determina que, en caso de conflicto, la norma de la Unión se aplica con preferencia sobre la norma interna contraria, cualquiera que sea el rango de esta, que el juez nacional debe dejar inaplicada sin esperar a su derogación ni plantear cuestión de inconstitucionalidad. El **efecto directo** es la aptitud de la norma de la Unión para crear derechos invocables por los particulares ante los tribunales nacionales, y exige que sea clara, precisa e incondicional. El reglamento, además de directamente aplicable, tiene efecto directo pleno, frente al Estado y frente a otros particulares. La directiva solo despliega efecto directo **vertical**, esto es, frente al Estado y no frente a otros particulares, y únicamente cuando ha transcurrido el plazo de transposición sin haber sido transpuesta o habiéndolo sido de modo incorrecto.

6.4. LO QUE NO SON FUENTES: ANALOGÍA, EQUIDAD Y DOCTRINA CIENTÍFICA

La analogía es un método de integración de lagunas, no una fuente. Conforme al art. 4.1 CC, «procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón».

El apartado 2 fija sus límites: «Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.»

La equidad tampoco es fuente. Según el art. 3.2 CC, «la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita».

La doctrina científica carece de valor normativo; su influencia es persuasiva y se ejerce a través de la labor del legislador y de los tribunales.

6.5. LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS

El art. 3.1 CC dispone:

> ***«Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.»***

De él resultan cinco criterios o cánones: gramatical o literal, «el sentido propio de sus palabras»; sistemático, «en relación con el contexto»; histórico, «los antecedentes históricos y legislativos»; sociológico, «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas»; y teleológico o finalista, «atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas».

El adverbio «fundamentalmente» no es adorno: el propio precepto otorga al criterio teleológico un papel orientador preferente, aunque no establece una jerarquía cerrada entre los criterios.

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de CENOP - Centro de Oposiciones, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra o al autor (contacto@cenop.es).